



NACIONES UNIDAS  
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Santiago, 30 de septiembre de 1993

Señor  
Ricardo Lagos  
Augusto Leguía Norte 127,  
Oficina A, El Golf  
Santiago, Chile

*Afuadecur  
en's*

*Ricardo-*  
Estimado señor Lagos:

Pienso que la contribución del señor Gert Rosenthal, Secretario Ejecutivo de la CEPAL (página 4), así como los aportes de los otros autores para este suplemento del diario español "El País" pueden ser de su interés.

Lo saluda atentamente,

*Volker*

Volker Petzoldt, Jefe  
Servicios de Información ONU/CEPAL

Adjunto.

# Temas

DE NUESTRA EPOCA

Las dos décadas transcurridas desde el golpe de Estado del general Augusto Pinochet —que el 11 de setiembre de 1973 derrocó al Gobierno constitucional de Salvador Allende— marcaron un cambio decisivo en las condiciones históricas en que se desarrolló la atormentada historia reciente de América Latina. En ese proceso, la dictadura pinochetista fue un paradigma para los regímenes militares que asolaron la región en los años setenta y ochenta y que condicionaron de forma decisiva las transiciones a la democracia. En estas páginas se analizan las particularidades del proceso económico, militar, cultural e histórico de Chile en el actual contexto latinoamericano.



Una reciente formación de carabineros, en el palacio presidencial chileno de La Moneda.

FRANCISCO ONTÁÑON

## Chile, veinte años después

La larga marcha del país suramericano desde el golpe de Estado de 1973 hasta la actual transición democrática condicionada por Pinochet



Imagen histórica del presidente chileno Salvador Allende saliendo del palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe de Estado de Pinochet.

EUROPA PRESS

# El general y su sombra

El ex dictador Pinochet permanece, a dos décadas del golpe, como la 'espada de Damocles' de la democracia chilena

JOSE COMAS

Se cumplen dos décadas del golpe de Estado del general Augusto Pinochet, que derrocó al Gobierno del socialista Salvador Allende y dio origen a una dictadura de casi 17 años, y el jefe militar todavía representa un factor de poder en Chile. Pinochet se ha convertido en una *espada de Damocles* sobre la democracia chilena. Los dos acuartelamientos del Ejército de Tierra, el último el pasado mes de mayo, pusieron de manifiesto la voluntad del ex dictador de reafirmar su posición y advertir que en cualquier momento puede cumplir su amenaza de que, como anunció un día, "si se toca un pelo a uno de mis hombres, se acabó el Estado de derecho".

Esta reciente acción militar obligó al presidente Patricio Aylwin a corregir su anterior declaración, optimista en exceso, de que la transición política chilena había concluido. Las peculiares reglas del juego de esta transición provocarán una situación que podría calificarse de perversa. El próximo 11 de marzo, el presidente Aylwin —elegido de forma democrática en diciembre de 1989, en la primera vuelta de unas elecciones que ganó por una abrumadora mayoría absoluta frente al candidato pinochetista, el ex ministro de Hacienda de la dictadura Hernán Büchi— tendrá que entregar el poder al sucesor que salga de las urnas.

Al mismo tiempo que Aylwin entregue el poder, el ex dictador, que perdió en 1988 un plebiscito hecho casi a su medida para quedarse en la presidencia, podrá seguir durante cuatro años más como comandante en jefe del Ejército: un auténtico *poder fáctico* en la sombra. Esto es lo ordenado por la Constitución pinochetista, que fijó las reglas del juego de la transición chilena a la democracia y así lo imponen las llamadas *leyes de amarre* con las que Pinochet pretendió atar corto a la nueva democracia.

Todo parece indicar que, salvo achaque de salud, en Chile hay ex dictador para rato y dispuesto a *rayar la cancha* donde se desarrolla el juego democrático. Desde su pues-

to, el comandante en jefe del Ejército emite un doble mensaje. Para sus hombres, Pinochet constituye la garantía de que no sufrirán consecuencias por los crímenes cometidos durante la dictadura. Para los políticos democráticos, una amenaza de que, si se desmandan, se acaba el Estado de derecho.

## Memoria y olvido

A pesar de este papel de Pinochet como elemento perturbador y factor de inseguridad sobre la democracia en Chile, el transcurso de 20 años ha borrado la memoria de muchos —desde luego no en la de las víctimas y sus familiares— el recuerdo de las torturas y los asesinatos de la dictadura y de los fracasos económicos de algunos de sus programas, basados en la aplicación del más duro *darwinismo* social, un *sálvese quien pueda* que condenó a la pobreza a centenares de miles de chilenos. Y emerge hoy de forma palpable en diversos sectores de poder una imagen *positiva* de Pinochet como precursor del actual auge económico de Chile. Se olvida que la dictadura dispuso de 17 años para conseguir los éxitos que, en su fase final, sentaron las bases de la actual situación económica, y que apenas ahora se ha conseguido equiparar el nivel de salarios mínimos al de los años anteriores al golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Para conseguir esto, Pinochet

contó con un régimen que sembró el terror, usó y abusó de unos poderes sin ningún tipo de control.

Fuera de las fronteras de Chile, el ex dictador está considerado como un paria político, con quien muy pocos quieren aparecer retratados. Sus contados viajes por el extranjero suelen concluir con escándalos, manifestaciones de repulsa y embarazosas situaciones para la diplomacia chilena, porque casi ningún dirigente desea recibirle. A pesar de estos desaires al ex dictador, el modelo chileno de transición a la democracia, y sobre todo el *milagro económico* que atraviesa Chile, despierta la envidia de casi todos los países de América Latina, empeñados en su mayoría en aplicar duros planes de ajuste que los chilenos ya parecen haber remontado.

El presidente de Argentina, el peronista Carlos Menem, no vacila en elogiar a Pinochet y establece diferencias entre la dictadura argentina, que no aportó nada bueno, y la chilena, que sentó las bases para la actual bonanza económica. En cartas al presidente Fidel Castro, intelectuales de diverso pelaje reclaman un plebiscito limpio, como el que Pinochet perdió en octubre de 1988 en Chile, para abrir en Cuba la posibilidad de una transición política sin violencia. El modelo nicaraguense de *cohabitación* entre los sandinistas y el Gobierno de Violeta Chamorro, elegido democráticamente, presenta paralelismos con el caso

chileno por la presencia al frente de las Fuerzas Armadas de uno de los ex dictadores, el general Humberto Ortega.

Muchos centros de poder, político y sobre todo económico, de América Latina atribuyen, de forma más o menos velada, a la "mano firme" de Pinochet gran parte del auge actual de la economía chilena. Este reconocimiento se expresa de forma palpable en el prestigio internacional del ex ministro de Hacienda del pinochetismo Hernán Büchi —considerado como el artífice de los logros económicos durante la fase final del régimen militar—, que se ha convertido en frecuente invitado de honor en múltiples foros económicos del continente; más de un gobierno ha contratado sus servicios como asesor para planes de ajuste, que intentan repetir el modelo chileno, aunque sin la presencia embarazosa de un Pinochet.

## ¿'Funcional' al sistema?

En esa misma línea, dentro de Chile no faltan quienes incluso consideran *funcional* para el actual sistema la presencia del ex dictador al mando del Ejército. A esta apreciación contribuye sin duda el hecho de que el Gobierno de centroizquierda de la Concertación —la coalición de demócratas y socialistas que gobierna en Chile desde marzo de 1990— no hizo tabla rasa con lo anterior y continúa, con logros evidentes, la política económica del final del régimen militar. Argumentan los partidarios de la *funcionalidad* de Pinochet que su presencia ha servido para mantener la cohesión del Gobierno de la Concertación. La sombra del ex dictador, todavía con mando sobre una tropa leal a su persona, ha servido para evitar conflictos entre partidos que se enfrentaron con dureza en los años anteriores a la dictadura. El propio Pinochet afirma que su presencia significa la garantía de que el Ejército chileno mantendrá la disciplina y no se producirán asonadas militares como las de los *carapintadas* del coronel Moha

**A la buena imagen del proceso chileno han contribuido los fracasos, sobre todo económicos, de casi todos los gobiernos de transición en América Latina**

med Seinfeld y el teniente coronel Aldo Rico en Argentina, o las de los *bolivarianos* del teniente coronel Hugo Chávez en Venezuela. La suma de todos estos aspectos ha generado una tendencia "latente a considerar a la dictadura de Pinochet sólo por su desenlace económico, dándole a posteriori una cierta legitimidad vergonzante. Esa actitud se ve reforzada por la comparación con los fracasos cosechados por otras dictaduras similares de la década de los setenta y los ochenta, y las crisis posteriores de varios gobiernos democráticos en los países de más peso del continente.

Agrupadas todas ellas bajo la categoría de dictaduras militares que aplicaban los principios de la doctrina de la seguridad nacional, impulsada desde Estados Unidos, no cabe duda de que representaban modelos diferentes cualitativa y cuantitativamente, según características propias de cada país. Al compararse con los asesinatos masivos de la dictadura genocida y rapiñera de Argentina, con la de los militares narcotraficantes de Bolivia o la de los brasileños empeñados en llevar adelante un modelo fracasado de nacionalismo económico, el régimen militar de Pinochet —si se olvidan sus centenares de asesinatos— se presenta ahora casi como una dictadura que ha realizado un tránsito sin grandes traumas hacia la democracia.

A la buena imagen del actual proceso chileno han contribuido el panorama de los fracasos, sobre todo económicos, que experimentaron casi todos los gobiernos latinoamericanos de transición a la democracia, que dejaron a los países sumidos en la hiperinflación. En Bolivia, Hernán Siles Zuazo tuvo que convocar elecciones anticipadas en 1985, con una moneda que ni siquiera valía el papel en que se imprimía. En Argentina, Raúl Alfonsín no pudo concluir su mandato en 1989 y entregó el poder con un país al borde del caos, una inflación del 200 % mensual y comerciantes que se defendían a tiros de los saqueadores. José Sarney, en Brasil, llegó al final de su presidencia en marzo de 1990 con una inflación de cuatro dígitos y la mayor deuda externa del mundo.

## Los años noventa

En Perú, el Gobierno del socialdemócrata populista Alan García ya no era de transición a la democracia, pero su tasa de inflación se calculaba en miles por ciento, la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso controlaba amplias zonas del territorio nacional y las cifras de asesinados y desaparecidos —en acciones de los senderistas y del Ejército— superaron en cinco años las de toda la dictadura de Pinochet. En Nicaragua la transición a la democracia llegó con 11 años de retraso y se demoró hasta 1990, porque los sandinistas continuaron con un régimen dictatorial que dejó al país en la hiperinflación y la ruina, agravada por la rapiña de algunos antiguos luchadores contra la dictadura somocista, que no vacilaron en saquear lo poco que quedaba en la llamada *piñata* final antes de entregar el poder.

Ya en la década de los noventa, el fenómeno de la corrupción casi generalizada ha contribuido al desprestigio de algunos gobiernos y presidentes latinoamericanos y al desencanto de amplias capas de la población con la democracia que, por primera vez en muchos años, se había implantado en todos los países del continente. Los gobiernos dictatoriales en las islas caribeñas de Cuba y Haití habían quedado aislados y convertidos en una especie de fenómenos históricos del pasado.

La corrupción del presidente de Brasil Fernando Collor de Mello, el primero elegido por sufragio directo en su país después de casi 30 años, le obligó a dimitir en diciembre de 1992, cuando ya el Senado había



El jefe del Ejército chileno, Augusto Pinochet, conversa el pasado 9 de julio con el presidente, Patricio Aylwin, durante el acto de jura de bandera de un millar de reclutas.

abierto la sesión para votar su destitución definitiva; un hecho histórico y sin precedentes en América Latina. En Venezuela, el pasado mayo la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión, también sin precedentes en el país, de suspender en el cargo al presidente socialdemócrata y populista Carlos Andrés Pérez. En estos días el Congreso corroboró la decisión judicial y decidió el alejamiento definitivo de Pérez. En el caso de Perú, se encuentra procesado y en el exilio el ex presidente Alan García. Otro socialdemócrata, el ex presidente de la República Dominicana Salvador Jorge Blanco, ha sido ya condenado en firme por corrupción. En Costa Rica, el ex presidente Luis Alberto Monge se encuentra procesado por corrupción. La presidencia de Menem en Argentina también ha registrado hasta la fecha una sucesión de escándalos y tráfico de influencias. Esta larga, aunque incompleta, relación de la corrupción en las más altas esferas del poder constituye, junto con la dureza de los planes económicos de ajuste, una carga explosiva para la estabilidad de la democracia en América Latina. La política económica neoliberal ha pasado a convertirse en una especie de dogma de fe en casi todos los países, tras el fracaso de todas las variantes de los viejos populismos del norte al sur del continente.

Las consecuencias de esta política de ajuste neoliberal, con supresión de subvenciones y libre juego de las fuerzas del mercado como asignador de recursos, ha provocado una pauperización de amplios sectores de América Latina y una proletarianización de las incipientes clases medias del continente. Esto constituye un factor social destabilizador para las todavía vacilantes democracias. Quedan abiertas las puertas para la aparición de variantes actualizadas de los Pinochet de la década final de siglo, desaparecido ya "el peligro comunista", en el que

se asentaban en su día las dictaduras basadas en la doctrina de la seguridad nacional.

La corrupción de las miriadas gobernantes puede añadir el ingrediente ideológico que justificaría la búsqueda de soluciones antidemocráticas, aunque el mismo sistema democrático haya demostrado por primera vez en los últimos tiempos, como en los casos de Brasil y Venezuela, que dispone de los mecanismos necesarios para la corrección y castigo de los responsables. A estas condiciones objetivas se une la presencia de un elemento subjetivo capaz de provocar en varios países del continente el estallido que puede poner en peligro la democracia: unas Fuerzas Armadas proletarianizadas y que se han quedado sin sus tradicionales hipótesis de conflicto.

La sombra de Pinochet, 20 años después de su golpe contra el Gobierno democrático presidido por Allende, se extiende por el continente americano, pero sólo como modelo de gestión económica y sin la presencia del dictador en su estilo puro, convertido en una mera referencia histórica con una repercusión concreta en Chile por su condición de jefe militar del Ejército de Tierra. Fuera de Chile, la figura del ex dictador ha quedado superada desde que su aparato ideológico y su discurso se ha convertido en algo hueco y sin sentido tras la caída del comunismo en Europa del Este y convertirse Cuba en un ejemplo negativo, capaz de disuadir a los más recalitrantes.

Sin embargo, como otro efecto perverso de esta situación, gana espacio entre algunos sectores latinoamericanos la idea de una "dictadura eficaz, limpia y sin sangre", que sirva para superar los males y deficiencias de una democracia incapaz de cumplir las expectativas depositadas en ella. El sueño de que con la democracia se come y se educa, que lanzó Alfonsín en Argentina, ha quedado desmentido por la realidad de la

necesidad de imponer una dura política económica que solucione los desastres del populismo. A esto se une el hecho de que en un régimen de libertades no se puede esconder la corrupción.

Así, el terreno se encuentra abonado para la aparición en América Latina de nuevas figuras, más o menos mesiánicas, capaces de capitalizar el descontento popular con las políticas económicas de ajuste neoliberal o de legitimar los atentados contra la democracia, en nombre de la eficacia o la lucha contra la corrupción y también el narcotráfico, como añadido para lograr la benevolencia de Estados Unidos. En este nuevo contexto ha surgido en Perú la *fujimorización*, que ha resultado un modelo potencialmente exportable a otros países del continente. En Guatemala fracasó el intento, pero en más de un país se palpa en el ambiente la posibilidad de que podría repetirse un *fujigolpe*. El discurso de Alberto Fujimori se basa en rescatar lo que llama la "verdadera democracia" frente a la ineficiente democracia representativa. La desesperación de un pueblo asediado por el hambre y desgastado por una guerra interminable ha dado a Fujimori en su país cotas altas de popularidad y apoyo a un golpe de Estado que suprimió, abruptamente y sin sangre, el poder legislativo y judicial. Ante la disyuntiva entre democracia y eficacia, muchos peruanos han preferido "la eficacia". Los éxitos en la lucha contra Sendero

Luminoso y una rebaja hasta términos tolerables de la inflación han permitido por ahora a Fujimori, con la alianza de las Fuerzas Armadas, conservar sus bases de apoyo popular. Una característica del *fujigolpe*, que en cierto modo lo emparenta con el pinochetismo, es haberse realizado para aplicar a fondo una política económica neoliberal, que no habría sido viable con el Congreso elegido democráticamente. En este sentido, el *fujigolpe* sirvió para abonar la tesis de los que afirman que "sólo con una dictadura" se pueden aplicar con éxito un plan económico de ajuste. Sin embargo, los casos de Bolivia con el Gobierno de Victor Paz Estenssoro entre 1985 y 1989 y, al menos por ahora, los éxitos conseguidos por el menemismo en Argentina muestran la posibilidad de mantener una política económica de ajuste y el respeto por el régimen democrático. En ambos casos se trata de viejos movimientos populistas que, tras un giro completo de sus principios, llevaron adelante la difícil combinación.

## Nuevo militarismo

En el intento de realizar un giro semejante cayó Pérez en Venezuela. La causa inmediata de su caída ha sido su implicación en la corrupción, pero Pérez se había quedado sin apoyo popular al intentar aplicar una política de ajuste en su segunda presidencia. En la primera entre 1974 y 1979, aunque la corrupción había sido sin duda mucho mayor que en la segunda, todo se reportó por una política populista de reparto a manos llenas al amparo de la bonanza petrolera. Aunque el movimiento desestabilizador de Venezuela haya surgido de sectores militares intermedios, no puede encontrarse un paralelismo con los golpes de los años setenta, de los cuales el de Pinochet constituye un paradigma.

Carentes de la ideología anticomunista de la doctrina de la seguridad nacional; desconfiados hacia Estados Unidos, al que perciben como una potencia deseosa de dismantelar los Ejércitos latinoamericanos, para convertirlos en fuerza contra el narcotráfico, los militares *bolivarianos* venezolanos representan una opción nacionalista y contraria a las políticas neoliberales con un fuerte potencial desestabilizador para la democracia en la región. Estos militares son los continuadores, en las condiciones de los años noventa, de la tradición militarista de América Latina.

**La corrupción en las altas esferas del poder  
y la dureza de los planes de ajuste  
son una carga explosiva para la estabilidad  
de la democracia**



Manifestación celebrada en Santiago de Chile el Primero de Mayo de 1991.

# El 'modelo' económico

La experiencia chilena y su impacto sobre el resto de América Latina

GERT ROSENTHAL

Es innegable que Chile se proyecta hoy como un país exitoso, en materia política y económica. En cuanto a lo primero, la transición de un sistema autoritario a otro democrático ha sido sorprendentemente ordenada, pacífica y civilizada. Queda mucho por hacer, pero al comparar la situación actual con la que prevalecía hace apenas cinco años el resultado supera las expectativas más optimistas de aquella época.

En cuanto a lo segundo, el país ha logrado combinar un crecimiento dinámico con equilibrios macroeconómicos, una sólida inserción en la economía internacional, crecientes niveles de ahorro e inversión, y una estructura productiva cada vez más diversificada. Es cierto que el crecimiento ha sido regresivo, y que la incidencia de la pobreza aumentó de manera espectacular entre 1970 y mediados de los años ochenta, pero aun allí hay avances recientes: las encuestas de hogares revelan que la incidencia de la pobreza, y en especial de la indigencia, viene disminuyendo en los últimos cinco a seis años, y en especial en el último bienio, mientras que el desempleo ha caído a su mínima expresión.

Estos éxitos inevitablemente provocan interrogantes sobre si el *modelo chileno* es algo digno de ser emulado por los demás países latinoamericanos. Aquí cabe una primera aclaración: ¿qué se entiende por el *modelo chileno*? Los principales ingredientes que trae a la mente el término son la liberalización comercial, la privatización, la coherencia y estabilidad en la gestión macroeconómica, el aliento a las exportaciones y la confianza irrestricta en las bondades del mercado. Si ésa fuese la caracterización del *modelo*, éste ya ha sido propagado hacia buena parte de los países de la región. Pero la manera en que esos ingredientes se aplicaron en Chile varió a lo largo del periodo comprendido entre 1973 y el presente, a tal punto que rigurosamente no cabe hablar de un *modelo chileno*, al menos sin precisar a qué etapa del proceso se refiere. Por otra parte, cabría cuestionar la idea de que el *modelo chileno*

en su conjunto constituye una adecuada fuente de inspiración para el resto de la región, debido a tres consideraciones. En primer lugar, no está claro que los éxitos de los últimos tiempos se deban exclusivamente a las políticas y estrategias generalmente asociadas a ese *modelo*. Hay diversos ingredientes que contribuyen a aplicar los avances aludidos y resulta difícil ponderar la importancia relativa de cada uno. Entre esos ingredientes hay algunos de viejo cuño —el sistema educativo desarrollado a lo largo de varias generaciones, la reforma agraria de los años sesenta, una añeja tradición de probidad y eficiencia en el manejo de la Administración pública— que se suman a la conocida estrategia de los ochenta que hoy llama tanto la atención.

## Situaciones muy diversas

En segundo lugar, en América Latina se dan situaciones muy diversas; cada situación tiene rasgos muy peculiares y no existen recetas de validez universal para todas: ni la chilena, ni cualquier otra. La dotación de recursos —humanos, naturales y de capital— de numerosos países ciertamente difiere de la situación chilena. Finalmente, algunos sostienen que el régimen autoritario fue funcional al éxito chileno, y ese argumento, además de ser discutible, resulta poco atractivo como parte de un *modelo* para países comprometidos con sistemas democráticos y participativos.

Pero hay otros motivos para descartar la idea de que el *modelo chileno* ofrezca la llave para acceder al éxito. Paradójicamente, esos motivos se asocian a tres de las lecciones más importantes que se pueden desprender de ese proceso. La primera se refiere a los riesgos de dogmatismo o, si se quiere, de la aplicación acrítica de enfoques conceptuales doctrinarios. La introducción del *modelo monetarista* a finales de los años setenta condujo finalmente a una verdadera catástrofe: la caída del producto interno bruto en 15% en

1982, seguida por una prolongada recesión con elevadísimos niveles de desempleo abierto y salarios muy reprimidos. Las rectificaciones posteriores, acompañadas por una dosis de pragmatismo, rindieron mejores resultados.

La segunda lección se refiere al elevado coste social del tránsito de una economía excesivamente protegida a una economía esencialmente abierta. Según cifras oficiales, la incidencia de la pobreza pasó de menos del 20% de la población a finales de los años sesenta a más del 44% a mediados de los años ochenta, antes de llegar a su punto de inflexión. Los salarios mínimos reales en 1992 apenas alcanzaron el nivel ya registrado en 1970. La estructura distributiva empeoró de manera considerable entre 1970 y 1990. Si bien es cierto que los indicadores educativos y especialmente de salud continuaron mejorando durante todo este periodo, gracias, entre otros aspectos, a una política relativamente exitosa de focalización del gasto público, también parece ser cierto que se registraron deterioros significativos en la calidad de la educación, cuyos efectos únicamente se registran en el largo plazo.

La tercera lección es que, incluso en condiciones más favorables que las que imperaron durante los años ochenta, un programa de ajuste estructural y la reestructuración de la capacidad productiva requieren un lapso prolongado para surtir sus efectos; en el caso de Chile, el periodo de aprendizaje, que incluyó varios acomodos en la política y altibajos en los resultados de la misma, se extendió por unos quince años.

De esas tres lecciones se podría cuestionar si los éxitos alcanzados por medio del *modelo chileno* no hubieran sido asequibles en un menor plazo y a un menor coste social. ¿No hubiera sido más aconsejable, acaso, confiar un poco menos en la sabiduría del mercado y adoptar alguna medida complementaria donde se señalen 'eran imperfectas o inexistentes'? ¿No hubiera sido más aconsejable aumentar el gasto en educación, en vez de recortarlo? ¿No se hubieran evitado muchas dificultades

si la banca privada hubiera sido supervisada de manera más rigurosa, para evitar el sobreendeudamiento que hasta hoy incide sobre el panorama financiero?

## Paradojas

Eso sí: Chile ofrece muchísimas lecciones, de corte positivo algunas y otras más bien adversas; experiencias exitosas potencialmente asimilables en otros contextos y experiencias sobre acciones que convendría evitar. También confirma que es cierto que, con persistencia, se puede llegar a la luz final del túnel. En ese sentido, su ejemplo sí puede ser fuente de inspiración.

Finalmente, otra paradoja: no obstante el marcado énfasis en la privatización y en el papel central de la empresa privada en el *modelo chileno*, una parte importante de su éxito proviene de una empresa pública que controla la producción y la exportación de la mayor parte del cobre chileno. La contribución de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) a las finanzas públicas y al balance de pagos del país en los años de la crisis del endeudamiento externo marcó una diferencia entre Chile y otros países de la región, que no tuvieron la suerte de poder generar parte de sus ingresos fiscales en divisas para hacer frente a sus compromisos, también en divisas, derivados del servicio de la deuda externa.

Por todo lo anterior, si bien la experiencia de Chile ofrece múltiples lecciones útiles para el desarrollo de otros países latinoamericanos, de ninguna manera se puede afirmar que se constituye en el *modelo* que debe guiar el desempeño de las políticas públicas en el resto de la región. Es de esperar que los demás países también encuentren su propio camino hacia el éxito, quizá acortando la distancia y reduciendo el coste social que no por fuerza es intrínseco a la transformación productiva y el ajuste.

Gert Rosenthal es secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

# La transición pendiente

Los militares quieren tener la última palabra en materia de seguridad y orden institucional, y de momento la tienen

RAÚL SOHR

"La transición terminó", proclamó el presidente Patricio Aylwin en agosto de 1991, a poco más de un año de Gobierno. Los chilenos entendieron que el sistema democrático estaba consolidado; se desvanecía, al fin, la sombra amenazante del militarismo. Pero las palabras de Aylwin fueron prematuras.

El Gobierno, convencido de la solidez del nuevo sistema político, quiso restaurar la prerrogativa histórica de los presidentes chilenos de llamar a retiro a generales. En el proyecto de ley, Aylwin excluyó al capitán general Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército, que es inamovible hasta 1997 (para entonces tendrá 82 años).

Las fuerzas de tierra, por boca de Pinochet, plantearon su oposición total a toda reforma. Pinochet señaló en enero de este año, ante la Cámara de Diputados, que la Constitución de 1980, escrita e impuesta bajo su régimen, reconoce a las Fuerzas Armadas: "Un alto grado de independencia relativa. Lo contrario, es decir, el no otorgamiento de ese grado de independencia habría significado comprometer las posibilidades de realización práctica de las nuevas funciones esenciales que al mismo tiempo se les estaban otorgando, a saber, la de velar por la seguridad nacional y garantizar el orden institucional de la República".

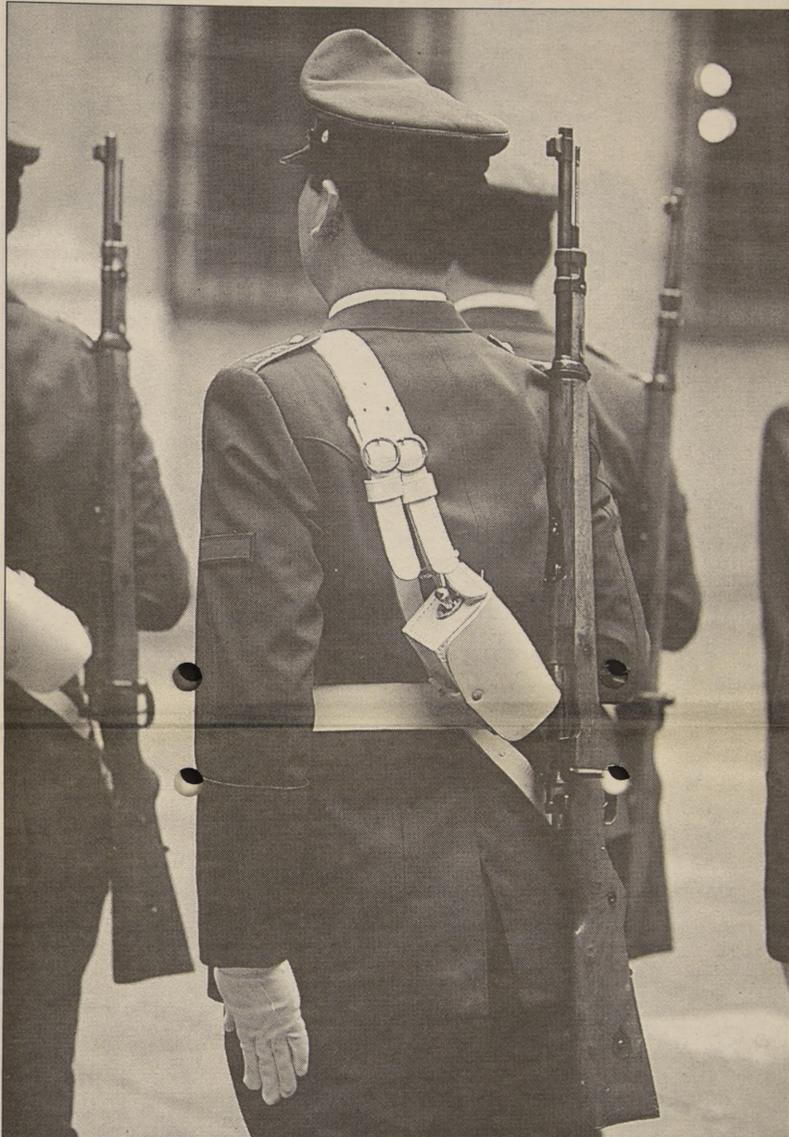
## Mensaje claro

El mensaje de Pinochet fue claro: si Aylwin puede retirar a generales, las Fuerzas Armadas perderán su actual autonomía ante el poder Ejecutivo. Y ello anula al Ejército para ejercer las funciones que lo convierten en un virtual poder independiente del Estado. Los hombres de armas quieren tener la última palabra en materia de seguridad y orden institucional, y de momento la tienen.

¿Es tan poderoso el Ejército que puede enfrentar a un Gobierno representativo? Las fuerzas de tierra, además del contundente argumento de las armas, tienen un amplio respaldo institucional. La derecha política se identifica con los militares, y sus senadores, sumados a los ocho senadores designados, cuatro de los cuales son nombrados por los uniformados, conforman una mayoría que les otorga un derecho a veto a toda ley.

Otro punto de fricción, más emotivo e inmediato, que divide a los chilenos, son los juicios contra militares acusados de crímenes; y, en especial, las investigaciones sobre la suerte de unos 1.100 detenidos-desaparecidos.

Pinochet advirtió antes de abandonar el palacio presidencial de La Moneda: "El día que me toquen alguno de mis hombres se acaba el Estado de derecho". Ese día no ha llegado, pues ningún uniformado ha sido tocado, o mejor dicho condenado por los crímenes investigados. Pero el 28 de mayo pasado, el Ejército estimó que el día de algunas condenas estaba próximo. Procedió entonces a una demostración de fuerza con el despliegue de tropas especiales fuertemente armadas. Fue un operativo modesto, pero inequívoco en cuanto a su intención intimidatoria.



Miembros de las Fuerzas Armadas chilenas, en la sede presidencial.

La demanda central del Ejército, aunque no explicitada, fue que se dictara una ley de *punto final*, como la aplicada Raúl Alfonsín cuando era presidente de Argentina. Esto implicaba poner una fecha límite para los juicios contra militares. Además se impugnaba la llamada *doctrina Aylwin*, según la cual todos los crímenes cometidos por militares, entre 1973 y 1978, deben ser investigados pese a estar cubiertos por una amnistía. La tesis del Gobierno es que primero hay que establecer las culpas para luego amnistiar.

En las negociaciones posteriores al 28

de mayo, los militares no obtuvieron una fecha de *punto final*. Tampoco consiguieron una amnistía sin investigación. Pero lograron dos concesiones importantes: la aceleración de los juicios, con la asignación de jueces especiales, y procesos secretos que no expongan a los acusados a la temida publicidad. Así, amparados por el sigilo, los militares serán amnistiados sin que se conozcan sus nombres. En el caso de condenados a cárcel, que se cree no pasarán de una docena, ellos cumplirán las sentencias en lugares de reclusión castrenses.

**Los uniformados han logrado la aceleración de los juicios y que los procesos sean secretos. Así, en el sigilo, serán amnistiados sin que se conozcan sus nombres**

El Gobierno ha albergado una esperanza secreta: que el Ejército coopere confesando dónde están las personas que sequestró y que hoy figuran como "desaparecidas". Pero los mandos castrenses han dicho que ello no ocurrirá. Pinochet afirmó hace algunas semanas: "¿De qué vamos a pedir perdón? ¿Vamos a pedir perdón porque hicimos el 11 de septiembre? ¿Pero si la gente lo pedía...!". En la misma oportunidad, Pinochet tiró un balde de agua fría sobre otra alusión de Aylwin: mientras uno dejaría la banda presidencial el próximo mes de marzo, el otro colgaría el uniforme. El capitán general aclaró que no tenía compromiso alguno de retirarse, y que nunca ha discutido el tema con el presidente.

Más allá de las fricciones en las relaciones cívico-militares, las Fuerzas Armadas enfrentan una crisis más profunda, de carácter existencial: la ausencia de una misión clara. En Chile, como en Argentina, Brasil y otros países suramericanos, la tradicional misión de combate al comunismo, que dominó las cuatro décadas de guerra fría, se ha esfumado.

Las tensiones militares en Suramérica han disminuido de forma considerable. El proceso de integración argentino-brasileño ha contribuido de forma tangible a la armonía regional. Estos dos países compitieron a nivel diplomático y bélico por la hegemonía regional. Hoy han renunciado a tan estéril propósito, y están comprometidos en un proceso de integración económica, conocido como el Mercosur, en el que participan también Uruguay y Paraguay.

Chile desarrolla, al igual que la mayoría de los países suramericanos, una economía abierta al comercio mundial. Ello multiplica los volúmenes de transacciones internacionales y regionales. Así, en los hechos, se produce una integración. En el plano militar los acercamientos significan, tarde o temprano, transitar de las hipótesis de conflicto a las medidas de confianza mutua. Cabe suponer, mirando hacia el año 2000, que la mayoría de los países suramericanos ganarán, conforme avance el proceso de integración económica y consolidación de las actuales hegemonías mundiales, una mayor identidad política regional. Ello, es de esperar, tendrá al igual que en la Europa comunitaria un correlato militar. Los dividendos de una concordia regional reforzarán a su vez el civilismo y la democracia.

Por lo pronto, la transición castrense desde los reflejos militaristas y represivos a acatar a las autoridades representativas es lenta. Las amenazas involucionistas están presentes. Hoy en Suramérica la única fuerza capaz de interrumpir los procesos democráticos son los militares. En algunos países esa amenaza es real. No es el caso de Chile, en el que no existen sectores cíviles favorables a un golpe de Estado militar. Son muchos los chilenos que, frente a los militares, esperan decir al igual que su compatriota y poeta Raúl Zurita: "Ni pena ni miedo".

Raúl Sohr es periodista chileno, sociólogo y asesor en temas de defensa de los parlamentarios de la Concertación de Partidos por la Democracia. Autor de *Para entender a los militares*.

# Después de las catacumbas

La cultura comenzó a regresar a la superficie con la apertura de 1983 y las primeras protestas públicas

JORGE EDWARDS

Sali de Chile en el mes de enero de 1970, durante los prolegómenos de la campaña en la que Salvador Allende terminaría por ganar las elecciones presidenciales. Después de diversos, y a veces accidentados, destinos diplomáticos en Lima, La Habana y París, y de cinco años de exilio virtual en Barcelona, regresé a Santiago a mediados de 1978, en lo que era todavía el período más duro del régimen militar. Cuando me entrevistaron en una revista de oposición tolerada y me referí, con la mayor ingenuidad, al golpe de 1973, alguien me comentó: eres la primera persona que ha utilizado la palabra *golpe* en la prensa escrita. "No diga golpe, diga pronunciamiento", recomendaría poco después un *artefacto* poético de Nicanor Parra. Pero, como comprenderé el avisado lector, no se trataba de cuestiones de pura poesía.

Sali de un país animado, inquieto, bullicioso y curioso, ávido de comunicarse con el mundo, electrizado, profundamente ideologizado en exceso. Regresé a mediados del 78 al *pueblo fantasma* descrito en un libro de poemas de Jorge Teillier, al *Purgatorio* de Raúl Zurita. Otra vez, como se ve, recorro a la intuición de los poetas, y lo hago a conciencia. Mi propia e inmediata impresión fue la de un país que se había replegado, que callaba, la de una ciudad fantasmagórica dominada por una eufemística "restricción de los desplazamientos nocturnos". Los fantasmas de la ciudad eran evocados entre susurros, con miradas por encima del hombro. "Tomados de la mano van los muertos / Caminando en silencio sobre el agua...", escribía Óscar Hahn.

Mi primer libro posterior al golpe de Estado, *Persona non grata*, que ahora también va a cumplir 20 años, había sido censurado por la Junta. Sus censores alegaron que el epílogo había sido escrito para complacer a las editoriales españolas y europeas. El segundo de mis libros de ese período, un conjunto de ensayos reunido bajo el título de *Desde la cola del dragón*, no fue objeto de la censura oficial, pero ningún distribuidor o librero se atrevió a traerlo a Chile. Como sus editores, Dopesa de Barcelona, desaparecieron, el libro siguió el mismo destino. Cuando Seix Barral publicó el tercero, la novela *Los convidados de piedra*, le dije al entonces cónsul general de Barcelona, un oficial de la Fuerza Aérea, que si los organismos de la censura lo autorizaban, viajaría a presentarlo en Santiago. "Si usted viaja", me aseguró el cónsul, con ojos brillantes de entusiasmo, "escribirá otro libro". Se imaginaba, sin duda, un texto apologetico de alabanza del régimen.

La censura real, ambiental, en el Chile de aquellos años, y su derivación más nefasta, la autocensura, eran muchísimo más fuertes que la censura oficial, administrativa. Cada ciudadano, o por lo menos la parte más locuaz y visible de la ciudadanía, se había convertido en un espontáneo y denodado censor. Mi novela, que también trataba de los fantasmas de la vida chilena, como ya lo indica su mismo título, fue autorizada para circular, pero fue sometida a la feroz censura del ambiente. Ahora recuerdo alarmas de bomba en una librería, entrevistadores que no lle-



Los candidatos de las próximas presidenciales deberán proponer ideas atractivas. En la foto, jóvenes chilenos.

gaban a la cita, amenazas de represalias si me atrevía a visitar alguno de los supuestos escenarios, a pesar de que aquellos lugares habían sido reinventados y rebautizados. ¡De nada valía! Eso sí, un amigo de juventud me paró en la calle y me espetó: "¿Por qué no me pusiste en tu novela?", pregunta que fue seguida de un insulto criollo más o menos amable.

Mi visión de la cultura en el Chile de

aquellos años, después de la agitación y del ruido un tanto vano de la década de los sesenta y del umbral de los setenta, es una visión de catacumbas. Catacumbas cuyos habitantes salían de vez en cuando a la superficie y ocupaban espacios restringidos, precarios: salas de teatro independientes, institutos binacionales, anexos de parroquias. Estos espacios de libertad empezaron a extenderse a sectores de

la prensa radial y escrita, mientras el Gobierno conservaba un control férreo de los canales de televisión. En aquellas circunstancias, la lucha contra la censura fue una de las claves de la lucha contra la dictadura. Por ejemplo, el Comité de Defensa de la Libertad de Expresión, que contribuyó a fundar y que más tarde presidió durante un par de años, hizo un inventario de libros censurados y se las ingenió para darlo a conocer al país.

Los chilenos, como siempre, eran escépticos, socarrones. Creían que nosotros, en nuestra eterna quejumbre, con nuestro espíritu agrio, exagerábamos. El Comité los obligó a comprender que había hasta libros de poesía lírica, como *Mal de amor*, de Óscar Hahn, que se encontraban prohibidos por las autoridades. Una oficina misteriosa, incrustada en algún rincón del edificio Diego Portales, determinaba los libros que ellos podían o no podían leer, y ellos, los confiados chilenos de siempre, lo ignoraban. Algún malestar debió infiltrarse hasta el interior del sistema. El general Pinochet, en un discurso improvisado en una plaza de provincia, ya no sé si en Linares o más al sur, anunció a mediados de 1983 que había decidido ponerle término a la censura previa, que los chilenos, de ahí en adelante, podrían leer los libros que les diera la gana (salvo que atentarán contra las leyes y las buenas costumbres...). A partir de ese día, hubo una rica literatura de testimonio y denuncia que adquirió el derecho a circular en forma de libro y que empezó desde el primer instante a conquistar lectores. Fue una apertura que coincidió con las primeras protestas públicas, con los primeros síntomas de pérdida del miedo colectivo. Uno puede pensar ahora que la fisonomía de la transición chilena empezó a configurarse desde entonces. La cultura salía de las catacumbas, regresaba a la superficie.

## Espíritu libertario

He escuchado decir más de una vez que la gente de la cultura, los intelectuales y artistas, tuvieron un papel decisivo en la transición chilena. Por mi parte, no estoy tan seguro. La transición fue el resultado del trabajo y de las decisiones de mucha gente, sin excluir, desde luego, a los políticos profesionales y a los artistas e intelectuales. Lo mejor que aportó el sector de la cultura fue cierto aire, cierta imaginación, cierto espíritu libertario. Esto era muy visible en la década de los ochenta en el teatro disidente, en algunas presentaciones de libros y lecturas de poemas, en algunos encuentros frente al público. A veces, en el Chile de ahora, llegamos a sentir nostalgia de aquellas jornadas. En la pequeña sala de una parroquia o entre los muros descascarados de un centro cultural de oposición, el discurso antiautoritario adquiría una vigencia, una fuerza, una intensidad que hemos olvidado. Parecía que el pensamiento, el arte, la crítica, tenían un sentido urgente, una especie de necesidad dramática. Era pesado, monótono, sentirse obligado a colocar el fenómeno pinochetista en el centro de todas las intervenciones, convertir el antipinochetismo en una especie de profesión, pero también era posible rebelarse contra esa imposición, contra esa

*El debate público se aboca ahora a problemas como el del medio ambiente, la Seguridad Social, la calidad de vida, la legislación sobre el divorcio, la educación*

simplificación y esa reducción del horizonte. En aquellos encuentros, por debajo y en los márgenes del país oficial, aparecía un país real inesperado, que nos sorprendía a nosotros mismos.

La gente de la cultura intervino en instancias que de alguna manera resultaron más políticas que las de los viejos políticos de profesión: en los crecientes espacios libres de la prensa, en innumerables foros en Santiago y en provincias, en la limitada a 15 minutos pero cada día más escuchada franja del *no* por la televisión. También participaron en mecanismos manejados por los políticos, pero donde su intervención permitía la llegada a sectores más amplios, como fue el caso del Comité de Elecciones Libres. Se podría sostener que la gente de la cultura, en plena atmósfera autoritaria, era menos sospechosa, parecía menos teñida, que la gente ligada al aparato entonces clandestino, declarado *en receso*, de los partidos. Eso le dio, por lo menos en algunos casos, un fuero, una posibilidad de ir más allá. Por lo demás, y ha llegado el momento de admitirlo y de estudiar el fenómeno, en la campaña del *no* se dio una situación en que ir más allá, pisotear los límites invisibles fijados por el oficialismo, producía beneficios políticos sorprendentes.

**Temas delicados**

Ahora, cuando faltan pocos meses para que termine el primer Gobierno de la transición, existe la impresión más o menos general de que la cultura ha sido la última de las prioridades en toda esta etapa. Es verdad que el Gobierno ha tenido que concentrarse en temas delicados, inherentes a una transición mucho más difícil de lo que parece a primera vista: el del mantenimiento de la estabilidad económica, el de la extrema pobreza, el de los procesos pendientes por



La educación de los jóvenes y la cultura serán también desafíos del futuro inmediato de Chile.

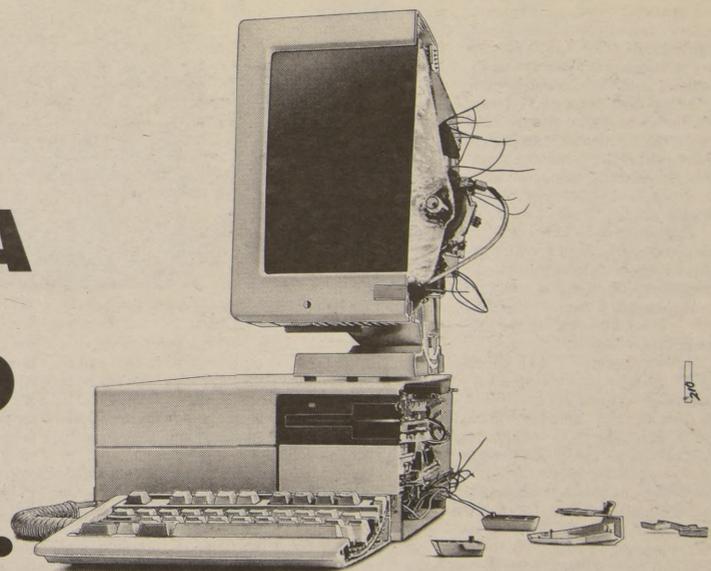
atropellos a los derechos humanos, el de las relaciones del poder civil con el poder militar, entre muchos otros. A pesar de esto, el Gobierno ha tomado iniciativas importantes: un nuevo sistema de subvenciones estatales a la creación literaria y artística, normas destinadas a facilitar el mecenazgo privado; una ley de fomento del libro y de la lectura, que acaba de crear, por primera vez en Chile, un Consejo Nacional del Libro.

**Relativo consenso**

En los primeros momentos de la campaña para las elecciones presidenciales de diciembre, se advierte una situación enteramente nueva en la política chilena. Existe un relativo consenso, con diferencias que bien examinadas no son de fondo, acerca del modelo económico y del sistema político más adecuados para el país. El debate público, que en épocas pasadas habría girado, por ejemplo, alrededor de los temas de la propiedad, de la libertad de empresa, del sistema democrático, se desplaza y se aboca a problemas como el del medio ambiente, la Seguridad Social, la calidad de vida, la legislación sobre el divorcio, la educación estatal y privada. El tema de la cultura, así como el tema cercano de las relaciones del Estado con los medios de comunicación, también parece destinado a adquirir prioridad en las discusiones de los próximos meses. Las candidaturas de Eduardo Frei y de Arturo Alessandri tendrán que hacer un esfuerzo de imaginación y proponer ideas atractivas, originales y a la vez realizables. Habrá que pensar en la educación, la cultura, las comunicaciones de una democracia moderna, consolidada, y que pretende mantener sus altos índices actuales de desarrollo económico. No es un desafío sencillo, después de todo, y tampoco son temas que podamos eludir en el futuro inmediato.

Jorge Edwards es escritor chileno.

**PREGUNTELE A NUESTRA COMPETENCIA COMO HA CONSEGUIDO RECORTAR SUS PRECIOS.**



**DELL 425 s/L**

- Procesador i486SX/25Mhz.
- Procesador reemplazable, actualizable a tecnología Pentium.
- Memoria caché opcional: 128 KB.
- Bus local de video integrado.
- Diagnósticos en BIOS.
- Memoria RAM: Desde 4MB a 64MB.
- Disco duro: Desde 80MB a 500MB.
- Disquetera: 5.25" o 3.5".
- Monitor: VGA mono, Super VGA color (800 x 600) y Super VGA color (1024 x 768).
- Teclado español.
- MS-DOS 6.0 español.
- Windows 3.1 castellano y ratón Dell.



Aunque vd. va a averiguarlo muy fácilmente cuando descubra lo que pretenden venderle por ese supuesto buen precio: exactamente la mitad de la tecnología que necesita. Y eso por no hablar de su servicio, que es menos que nada. Pero no se preocupe. En DELL cuando le ofrecemos unos precios como éstos, lo hacemos con la generación de 486 más avanzada del momento: procesador actualizable a tecnología Pentium, bus local para video integrado en la placa base, diagnósticos residentes en BIOS, etc. Y con el mejor servicio: 30 días de prueba, un año de garantía in situ, servicio de consulta telefónica para toda la vida del sistema con uno de nuestros ingenieros y nuestras tres garantías de

compatibilidad, respuesta rápida y servicio al cliente. Ahora sólo le queda preguntar a nuestra competencia. Muy pronto descubrirá lo que ellos entienden realmente por "recortes". Después tendrá muy claro un sólo objetivo: Llamar a DELL.

**¡ACCEDA AL SOFTWARE MÁS AVANZADO A UN PRECIO INCREÍBLE!**

Llévese ahora un DELL y ahorre en los paquetes:

	MS-DOS	MS-DOS
1 paquete	79.900pts	29.500pts
2 paquetes	159.800pts	79.500pts
3 paquetes	239.700pts	119.500pts



Lo más inteligente es llamar a DELL®

900-100-185

425s/L, 4MB, 80MB, Super VGA Color: **180.000 Pts.** (Sin IVA).

El logotipo de INTEL INSIDE, i486 y Pentium son marcas registradas por INTEL CORP.

# Un futuro sin Pinochet

Es la condena del ex dictador chileno, y no la absolución, lo que impone el análisis histórico de su régimen

ALAIN TOURAINE

Veinte años después, ¿debemos rectificar nuestro juicio sobre el general Pinochet? Para nosotros era el dictador que derrocó una democracia, hizo morir a miles de personas, deportó y obligó a exiliarse a decenas de miles más, suprimió las libertades públicas y encubrió los crímenes de la policía política. ¿Debe convertirse para la posteridad en el gran precursor de las políticas liberales que, tanto en Europa del Este como en América Latina e incluso en Europa occidental, han triunfado sobre los socialismos centralistas e incluso sobre las socialdemocracias y los regímenes nacionalpopulares? ¿He oído a empresarios liberales de Moscú acoger a Pinochet con el nombre de demócrata! ¿A quién hay que creer?

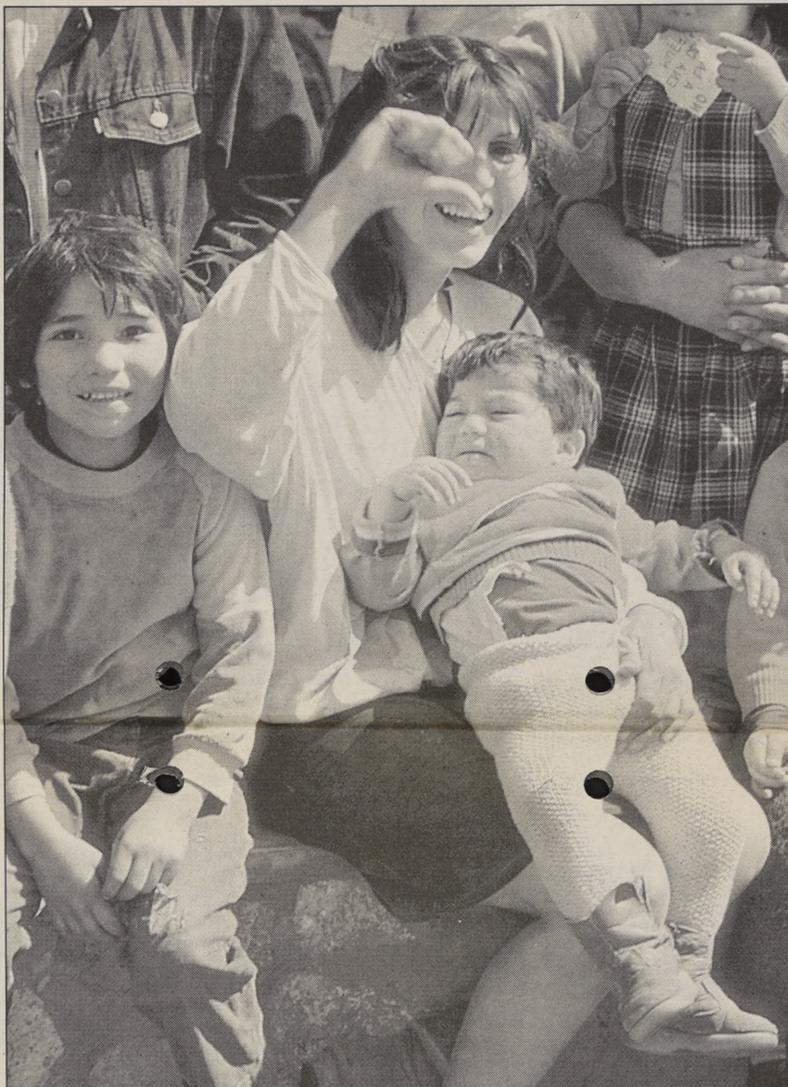
La opinión pública de Chile emite juicios dudosos y contradictorios: nadie quiere volver a la época anterior a 1973, cuando la economía y la propia vida política estaban en plena descomposición; sin embargo, casi nadie niega la brutalidad arbitraria de la represión posterior al golpe de Estado. Los mejores analistas, como M. A. Garretón, subrayan la importancia del espíritu *fundacional* junto al aspecto *represivo* de la actuación del general Pinochet, y es indiscutible que, a partir de 1975, los *Chicago boys* pusieron en práctica políticas que se imitaron con éxito en Bolivia, en México y, recientemente, en Argentina, pero también en Polonia y en Hungría y, muy recientemente, en Rusia. En cualquier caso, no basta con expresar opiniones y hacer de Pinochet el símbolo del mal; hay que analizar una experiencia larga, inscrita en un marco internacional más amplio y cuyos efectos aún se dejan sentir directamente, puesto que el Gobierno democrático ha continuado, en puntos esenciales, la obra del Gobierno anterior.

Acabo de recordar la prudencia con la que hay que juzgar al general Pinochet; quiero ahora explicar por qué es la condena y no la absolución, y menos aún el elogio, lo que, en mi opinión, el análisis histórico impone.

En una primera fase (1973-1975), el general Pinochet reprimió los movimientos populares con una gran violencia, en parte porque los sobrestimaba y quería aterrizar al país para provocar una reacción de los partidos y de los sindicatos que podrían poner en peligro el régimen aún frágil creado por la Junta Militar. Me parece que, después, como la dictadura argentina en la época de Martínez de Hoz, intentó reconstituir la vieja oligarquía financiera. Entre 1975 y 1981, se edificaron castillos de naipes financieros bajo la dirección de representantes de las familias oligárquicas más tradicionales y la economía fue recuperándose lentamente: el desempleo siguió siendo elevado y el nivel de vida en 1981 no había hecho más que alcanzar su nivel de antes de 1973.

## Fracaso y recuperación

La crisis económica en el continente que se declaró ese año afectó a Chile con una violencia que puso de manifiesto la extrema debilidad de su economía. El desempleo declarado afectaba a un tercio de la población activa, la mayoría de los bancos se vinieron abajo y, de hecho, pasaron a estar bajo el control directo del Estado. Fue después de 1981 y, en realidad, a partir de 1983-1984, cuando se observó una recuperación econó-



La población chilena ha demostrado que se podía mantener la recuperación económica y restablecer la democracia.

mica que sería duradera y se mantendría hasta hoy. Tras el fracaso de la política populista entre 1968 y 1973, y el fracaso de la oligarquía financiera entre 1975 y 1981, la economía chilena se vio por fin impulsada por el éxito importante de la producción pero, sobre todo, de la exportación: el cobre alcanzó precios elevados y estables; algunos sectores, como la pesca, mantuvieron un crecimiento iniciado 20 años antes; por último, la reforma agraria, a pesar de los esfuerzos de la dictadura por abolirla, tras acabar con la economía de la renta agraria, favoreció una nueva categoría de empresarios rurales, que crearon una agricultura de exportación, de marcado carácter capitalista y consiguieron, especialmente en el sector de la fruta, pero también en los de la madera y las flores, éxitos importantes. Hay que atribuir a Herman Büchi, el responsable de la economía chilena durante los últimos años de Pinochet, el mérito de haber prestado fuerte apoyo a estos esfuerzos exportadores, así como el haber infundido confianza a los inversores extranjeros, lo que permitió reducir fuertemente el peso que la deuda externa suponía para la economía nacional. Es justo decir que, a partir de 1975, algunos *Chicago Boys* concibieron una modernización real, económica y a veces incluso social, de Chile.

Pero el agotamiento de los modelos nacionalistas y la represión política practicada

por el general Pinochet no conducían necesariamente a la modernización económica. Al fracaso visible a finales de 1981 se oponía el éxito ya notorio de la nueva política en el momento en que el general Pinochet, tras perder el plebiscito, abandonó el poder.

Que Chile se encontrara en unas condiciones miserables en 1973 es algo que nadie puede negar, pero puede decirse con igual justicia que la Democracia Cristiana y después la Unidad Popular habían puesto en movimiento un país sumido durante mucho tiempo en el estancamiento. Hay que recordar también el papel importante de algunos ingenieros modernizadores en el marco de la Corfo, que, desde los años sesenta, ya habían dado a Chile una industria siderúrgica y modernizado su industria eléctrica. En lugar de comparar los fracasos anteriores a 1973 a los éxitos que supuestamente vinieron después del golpe de Estado, es más exacto recordar que los obstáculos al desarrollo han estado tan constantemente presentes como los esfuerzos de modernización. Precisemos unos y otros. El gran obstáculo al desarrollo de Chile ha sido siempre el hecho de que la economía estuviera dominada por la política y el clientelismo, el sectarismo o el autoritarismo, según las épocas, que han agravado esa politización de la economía. Militares y financieros han sometido desde 1973 la economía y la sociedad chilenas a lógicas de acción tan poco

racionales como la politización extrema de los últimos años anteriores al golpe de Estado. Por otro lado, los elementos favorables al progreso han sido: la calidad de la educación, especialmente técnica, una fuerte conciencia nacional, la voluntad de una gran parte de las élites dirigentes de integrarse en Occidente y en sus modelos de gestión económica. Estos factores positivos nunca desaparecieron, ni en 1970 ni en 1981.

## La modernización

El general Pinochet, como sus emuladores de Brasil, de Argentina y de Uruguay, ha representado ante todo la represión antipopular y su actuación se ha visto dominada por la ideología de la *seguridad nacional* más que por la del desarrollo económico. Es cierto que fomentó directamente una política de desarrollo económico tras haber apoyado una política más conservadora, como hicieron antes que él los generales brasileños que confiaron la gestión de la economía del país al liberal conservador Roberto Campos y después a Delfim Neto. Hay que emitir un juicio matizado sobre los *Chicago boys*, pero el general Pinochet llevó a cabo una gestión que no ha sido decisiva para la modernización de Chile; ésta no se ha apoyado en casi ninguna industrialización importante y es un notable éxito del comercio exterior más que del aparato de producción.

La historia no avanza en bloque hacia arriba o hacia abajo. La ruptura de un sistema político desbordado por las presiones sociales, las luchas de tendencias y el izquierdismo irresponsable de corrientes importantes del partido socialista y de la izquierda surgida del cristianismo, ha hecho ciertamente posible la modernización económica, igual que la victoria de Frei en 1964 dio paso a otra etapa de la modernización. Pero no puede afirmarse que la pérdida de la libertad, el aumento de las desigualdades sociales, la represión política, no hayan sido más que medios al servicio de la industrialización.

La política del general Pinochet debe ser juzgada según sus objetivos proclamados: nacionalismo autoritario, antisocial, anticultural. Esta política ha aumentado las desigualdades sociales más claramente de lo que ha facilitado el crecimiento. Algo que los chilenos han comprendido al demostrar, a partir de 1989, que se podía mantener y acelerar la recuperación económica, restablecer la democracia y hacer un esfuerzo por limitar la desigualdad social.

El Chile de 1993 no puede mirar ni hacia la época anterior a 1973 ni hacia la posterior al golpe de Estado; no tiene más opción que mirar hacia el futuro, y en ese futuro no hay sitio ni para el general Pinochet ni para sus partidarios. Como no pensar aquí en el ejemplo español: España experimenta una gran modernización económica desde 1960, pero el general Franco, que murió en 1975, dejará la imagen de un dictador reaccionario, no la de un modernizador. Chile, como España, ha emprendido el camino de la reconciliación nacional y no el de la revancha; pero el hecho de que el general Pinochet siga presente y activo en el Chile de hoy no impide que el Chile de mañana vaya a estar cada año más alejado del régimen que le fue impuesto a ese país desde 1973 hasta 1989.

Alain Touraine es sociólogo y director del Instituto de Estudios Superiores de París.